

Caja fuerte

LUIS MIGUEL GONZÁLEZ

Reporte desde Corea del Centro: ¿qué dicen las calificadoras que enoja tanto?

¿Qué han dicho las calificadoras acerca de Pemex y de México? ¿Por qué han generado tanta molestia en el presidente, los legisladores y los seguidores de AMLO?

Moody's fue la primera en expresar sus dudas sobre los planes del gobierno para Pemex y el sector energético. No le salen las cuentas. La calificadora describe una empresa en una situación muy complicada: producción a la baja; reservas probadas en declive; fuerte carga fiscal; flujo de efectivo negativo, y alto nivel de endeudamiento.

El diagnóstico de Moody's explica que uno de los principales riesgos se encuentra en las gigantescas necesidades financieras de Petróleos Mexicanos para los próximos tres años: entre el 2019 y 2021 deberá pagar vencimientos por el equivalente a 25% de su deuda actual (cercana a 92,000 millones de dólares). A estos pasivos habría que añadir los compromisos por pensión de jubilación de sus trabajadores.

¿Puede una empresa con una carga financiera tan grande lanzarse a un ambicioso plan de inversión? AMLO piensa que sí: quiere que la producción petrolera regrese a los niveles de 2.6 millones de barriles diarios (en enero fue de 1.66 millones) y, además, aspira a que México sea autosuficiente en refinados.

¿Cuánto cuestan estos planes y de dónde saldrán los recursos? Aquí está el corazón del debate entre López Obrador y las calificadoras. Moody's y Standard and Poor's consideran que hay una brecha que asciende a miles de millones de dólares al año. Si se suman los compromisos financieros y los nuevos planes, los requerimientos financieros están en un rango de 18 a 20,000 millones de dólares anuales. El flujo de efectivo garantizado pa-

ra la empresa está muy debajo de esa cantidad y no han podido explicar cómo se llenará la brecha. Un factor a tomar en cuenta es que el mejor negocio de Pemex es la exportación de crudo. En refinación, siempre ha perdido dinero.

¿Pondrá el gobierno federal los recursos? Este es uno de los dilemas. Si lo hiciera, podrían descomponerse las cuentas del propio gobierno. Esto es una de las cosas que dijo Standard & Poor's en su informe de siete páginas que provocó tanta molestia. Las dudas sobre los planes en el sector energético en un contexto de menor crecimiento económico están incrementando los riesgos para el gobierno federal. Tantos compromisos podrían romper el equilibrio de las finanzas públicas y, eventualmente, poner presión para la calificación de la deuda soberana del gobierno federal.

¿Hay otras fuentes de recursos? AMLO no es partidario de la inversión privada y ha congelado los planes para que Pemex se asocie con otras empresas. Ir a los mercados por recursos es una opción cara, que se volverá más cara... y, además, depende de cómo nos vean las calificadoras.

¿Por qué Moody's, S&P y Fitch no toman en cuenta los esfuerzos para combatir la corrupción? En primer lugar, porque no es su papel. En segundo lugar y quizá más importante, porque la información sobre el combate a la corrupción se produce en clave política y no en clave financiera. En el contexto actual, el gobierno podría lograr que sus logros fueran tomados en cuenta por las calificadoras si ofreciera cuentas más claras de sus avances: ¿dónde están? En campaña hablaban de ahorros por 500,000 millones de pesos, ¿cuánto llevan?, ¿en qué rubro de las cuentas públicas los hallamos?, ¿cuánto corresponde a Pemex?

lmgonzalez@eleconomista.com.mx